

El documento Venezuela de Eco 92 o el tercermundismo ambiental

ALDEMARO ROMERO DIAZ (*)

En los últimos tres años y medio, la situación ambiental venezolana ha empeorado notablemente no sólo por la incompetencia oficial y la blandenguería en la aplicación de normas por parte de nuestras autoridades, sino, por encima de todo, debido a la falta de una política ambiental coherente y moderna. Ahora, cuando Venezuela debe mostrar ante el mundo lo que cree que debe ser esa política, la falta de visión es evidente, tal y como se puede leer en el documento que representantes del Gobierno venezolano han escrito y llevan a la reunión de Río de Janeiro.

Titulado "Un compromiso nacional para el desarrollo sustentable", el documento en cuestión es una ensalada de insensateces. Comienza diciendo lo que todos sabemos: que Venezuela no sigue un "desarrollo sustentable", término que tiene muchas acepciones y que nunca se define a lo largo del texto y, lo que es peor, en ningún lado se explica con precisión cómo vamos a hacer para lograr ese modelo de desarrollo.

El Capítulo II ("El país y su desarrollo") reitera el estilo de generalidades con información sobre Venezuela, más propia para el Almanaque Mundial que para un documento de política ambiental.

En la misma tónica continúa el Capítulo III ("Los recursos naturales"), sólo que aquí los errores conceptuales son evidentes por sí mismos. En primer lugar, este capítulo parte de la premisa de que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Mamr) "plantea al país un nuevo estilo de desarrollo que haga énfasis en la explotación racional de esos recursos naturales". Veamos cómo ese despacho ha "manejado" estos recursos en los últimos años:

a) Babas: a pesar del triunfalismo oficial, el programa ha sido un desastre, hasta el punto

que este año el mismo ha tenido que ser severamente restringido, cuando los voceros del Mamr decían que se trataba de un recurso tan abundante que permitiría ser explotado por años y con pocas restricciones.

b) Delfines: la posición del Mamr ha sido que en el océano hay delfines de sobra ("excedentes") y que los mismos son para aprovecharlos (cómo, nadie sabe), y que si la gente se preocupa por la matanza de estos animales en el Pacífico Oriental, como resultado de las acciones de nuestra flota atunera y en nuestras costas por parte de los palangreros, es debido a "exageraciones" y "producto de la sensibilidad popular por tratarse de Flipper".

c) Agua: sólo el 67% de la población tiene acceso a agua potable y 50% a sistemas cloacales.

d) Reservas forestales: ninguna parte del país muestra semejante nivel de deforestación e invasión como estas "áreas protegidas". A la Reserva Forestal de Ticoporo, apenas le queda el 5% de la vegetación original.

Si éstos y muchos otros casos son los que el Mamr nos quiere dar como ejemplos de utilización sustentable de nuestros recursos naturales, pobre país. Por si fuera poco, cuando se habla de energías alternativas, no se dice que las mismas no aparecen como impulsadas con seriedad ni por el Mamr ni por el Ministerio de Energía y Minas y, mucho menos, que nuestro país se caracteriza por un despilfarro energético impresionante.

Sin embargo, el informe donde cae en un paroxismo de ceguera institucional es en el Capítulo IV, titulado "Los principales problemas ambientales de Venezuela". No sólo es un rosario de vaguedades sino que jamás se mencionan los verdaderos problemas del país, de los cuales el propio Mamr es directamente responsable: deforestación de una ter-

cera parte de nuestro territorio, generación y falta de tratamiento de 200.000 toneladas de desechos tóxicos y radioactivos, manejo inadecuado de los desechos sólidos, la severa contaminación en 10 de nuestras cuencas hidrográficas -incluyendo la más contaminada de América Latina, el Tuy-, la contaminación fecal de casi el 50% de nuestras playas, niveles de contaminación del aire por encima de lo permisible en seis ciudades de Venezuela y nueve áreas de Caracas (cosa negada por el Ministerio del Ambiente, a pesar de que nosotros poseemos los informes técnicos que así lo demuestran y que el Mamr mantiene ocultos a la opinión pública), y así por el estilo.

Por supuesto, la literatura "consultada" para tal efecto es fundamentalmente la oficial y para nada citan los trabajos seminales de Cunnill Grau, la Auditoría Ambiental de Venezuela y muchos otros de investigadores del Ivic y universidades nacionales, que contradicen fehacientemente el optimismo gubernamental acerca de nuestros problemas ambientales. Por supuesto, para nuestro Gobierno, el gran responsable del deterioro ambiental es "la pobreza", es decir, algo lo suficientemente intangible como para eximir al Estado de su responsabilidad, pero tan falso como una moneda de Bs.3, ya que en ninguna parte se explica por qué, entonces, son las sociedades más ricas las que más contaminan.

El Capítulo V ("La acción del Estado") es una serie de disquisiciones teóricas sobre lo que supuestamente el Estado venezolano dice haber estado haciendo estos últimos años, pero que en realidad se ha quedado en el papel: planes y proyectos inconclusos o hasta no iniciados, decretos para crear "áreas protegidas" de papel, marañas de instituciones que ilustran por qué nuestra burocracia ambiental es tan ineficiente y un rosario de leyes que sabemos que nunca se cumple, entre otras co-

267

sas porque si se cumpliera, funcionarios del Marnr y los responsables de nuestras autodenominadas industrias básicas, irían a la cárcel por su parte de responsabilidad en las mismas.

El Capítulo VI ("El reto del desarrollo sustentable") es, de nuevo, un conjunto de disquisiciones vagas que transpira la falta de un concepto bien definido de lo que están hablando.

El último capítulo ("Venezuela y su política ambiental internacional") es el más imaginativo de todos: no sólo Venezuela carece de algo semejante a una política ambiental internacional, sino que todo lo que dice que se propone hacer, sabemos por los antecedentes que es incapaz de hacer.

Por supuesto, a lo largo del documento, el denominador común es el estatismo, la creencia de que es el Estado, y no la sociedad, el motor del cambio en políticas ambientales, al contrario de lo que ha ocurrido en el resto del mundo. Por supuesto, se asume que la sociedad civil organizada no es otra cosa que un elemento de comparsa para la acción del Estado y que es la industria privada y no la estatal la gran culpable de muchos de nuestros problemas. En otras palabras, un neomarxismo rampante.

En resumen, se trata de un documento que no refleja la realidad del país, que sí refleja la falta de una política ambiental coherente por parte del Estado, que es sumisa ante la acción de las industrias básicas (Pdysa fue quien financió la publicación de este documento) y no representa para nada la sociedad civil.

Nunca, en la historia ambiental del país, tanto vacío filosófico y tanta ceguera institucional pudieron llenar tantas páginas de un documento tan pobre.

(*) Director Ejecutivo Bioma, PHD

11-6-92